



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010023295 DEL 03/07/2014

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de Covarachía, del departamento de Boyacá, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010009025, del 31 de marzo de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de Covarachía, departamento de Boyacá, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

a.- Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010009025 del 31 de marzo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010009025, del 31 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de Covarachia, del departamento de Boyacá, mediante el oficio No. SSPD 20144010177231 del 31 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 4 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El día 10 de abril de 2014 el representante legal del municipio, señor Luis Alfonso Camacho Téllez, compareció a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20144010009025 del 31 de marzo de 2014.

Ahora bien, el señor Luis Alfonso Camacho Téllez, en su calidad de alcalde del municipio de Covarachia, del departamento de Boyacá, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290204212 del 25 de abril de 2014 y 20145290209932 del 28 de abril de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010009025 del 31 de marzo de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de Covarachia, del departamento de Boyacá, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con los No. SSPD 20145290204212, del 25 de abril de 2014 y 20145290209932, del 28 de abril de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"De tal manera, las inconformidades que nos asisten son las siguientes:

1. Si bien esa Entidad por auto 20134010020996 del 23 de octubre de 2013, ordenó oficiar a este Municipio para saber la calidad con que actuó el señor RAFAEL GARCÍA, en la respuesta inicialmente ofrecida manifestamos que se trataba de un suscriptor más de los servicios públicos, pero, ello obedeció a que para ese momento el suscrito Alcalde no contaba con toda la información para el efecto, pues, estaba recientemente elegido como tal dada la elección atípica que se presentó por nulidad de la elección del inicialmente elegido. No obstante, para efectos de este recurso, y previas nuestras excusas municipales, me permito manifestar que, mediante Acuerdo No. 023 de 2009, el Concejo Municipal creó la Unidad de Servicios Públicos de Covarachia y en el mismo determinó requerirse de una Junta Municipal de Servicios Públicos. Posteriormente, al realizar las consultas con miembros de la comunidad, se nos hizo saber que de dicha Junta hizo

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

parte el señor RAFAEL GARCÍA, quien ejerció como Presidente de la misma, por ello él fue la persona que suscribió la Resolución No. 001 de 2012.

Además, dicha Junta cuenta con basamento legal, pues, conforme al inciso 6° el Art. 6 de la Ley 142 de 1994 se estableció:

"(...)Pero los concejos determinarán si se requiere **Junta** para que el municipio preste directamente los servicios y en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de ésta ley(...)",

Así mismo, en uno de los considerandos de la Resolución CRA 271 de 2003, se dijo:

"(...)Que dentro del régimen de libertad regulada, las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, son fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las personas prestadoras que presten los servicios o por quien haga sus veces, o por el alcalde del municipio cuando los servicios sean prestados directamente por la administración municipal, mediante la aplicación, para su cálculo, de las metodologías expedidas para tal efecto por esta Comisión (...)"

De igual manera, en el Art. 1° de dicha resolución, que modificó el artículo 1.2.1.1 del Título 1 del Capítulo 1 de la Resolución CRA 151 de 2001, se lee:

" **Entidad tarifaria local.** Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios.

De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:

a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que hace referencia en inciso 6° del artículo 6 de la Ley 142 de 1994:(...)"

Por consecuencia, luego de conformada la Junta Municipal en cita, en reunión del 20 de noviembre de 2009 (por un lapsus cálimi o clavis, se plasmó que fue en 2010), decidió aprobar el estudio presentado para el costo de tarifas, conforme al Acta 001 de dicha Junta.

Ya en el año 2010, en sesión extraordinaria de dicha Junta, fue expedida la Resolución No. 001 del 25 de febrero de 2010, mediante la cual se aprobó formalmente la estructura tarifaria de los servicios públicos de Covarachá, la cual aparece suscrita para RAFAEL GARCÍA como presidente de la Junta y LUIS ALBERTO SIZA como Secretario de la misma.

De tal manera, como las normas arriba transcritas posibilitaron la creación o existencia de una Junta Municipal - así el Municipio prestara directamente el servicio -, fue ella quien asumió la competencia para expedir el acto formal de implementación y aplicación de las tarifarias, la cual es acorde a los lineamientos de la CRA.

2. De acuerdo con lo manifestado anteriormente, el Municipio si implementó y aplicó las metodologías de la CRA, incluso en aplicación del principio constitucional de la realidad sobre las formalidades, significando con ello que el municipio si ejecutó la estructura tarifaria para los servicios de AAA, por consecuencia, ruego de la SSPD hacer prevalecer dicho principio, a efectos de no mantener la descertificación municipal.

En efecto, en otro, de los requisitos adicionales que exige el Art. 5° de la Resolución 1639, referido al " Reporte de información al SUI, o el que haga sus veces", dice que se debe cargar la siguiente información:

" (...)Para la vigencia 2012:

(i) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI(...)" (Subrayo y resalto).

Por consiguiente, si el requisito de reportar el 30% de las tarifas aplicadas para el 2012 fue aceptado por la SSPD (pues en auto no se esgrime que no se haya cumplido este requisito), fue

precisamente por que se le dio prevalencia a la realidad tarifaria establecida en el Municipio y formalmente a través de la resolución 001/10.

3. Así mismo, manifiesto al Despacho que esa SSPD certificó al Municipio en esta materia para la vigencia 2011 y, acontece que, para tal vigencia fue tenida en cuenta, precisamente, la misma resolución No. 001 de 2010, suscrita por el presidente de la Junta Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios, por tanto, tratándose del mismo acto sería injusto que hoy nos descertifiquen.

4. Aunado a lo anterior, entendemos que la descertificación correspondería a la vigencia 2012, por tanto, desde el punto de vista temporal-fiscal, no sería criterio de justicia que se limitara la administración de los recursos del SGP para las vigencias que actualmente siguen (máxime cuando los recursos de las vigencias 2013 y 2014 en materia de agua potable y saneamiento básico ya fueron ejecutados o se encuentran en ejecución.) Es entendible que la norma aplicable (Art. 4.3 del Decreto 1040 de 2012), dice que la descertificación opera desde que la misma es decretada, pero sin expresar hasta cuando, así: "... 4.3 Descertificación. Es la consecuencia de no obtener la certificación de que trata el numeral anterior. Los distritos y municipios que sean descertificados no podrán administrar los recursos de SGP – APSB, asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio, ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, a partir de la fecha de la descertificación." (Subrayo y resalto) y, así mismo lo reitera el inciso 2° del Art. 13, ibídem, lo que significa que se consagró una intemporalidad al respecto, sin embargo, esa posición del Gobierno Nacional resultaría incompatible con la Constitución Política (Art. 4), en particular, atentaría contra el preámbulo, los Arts. 1, 2, 11, 13, 22, 29, 42 a 53, 78 a 85, 339, 356, 357, 359, 365 a 370 de la Carta, pues no tiene en cuenta ni las vigencias fiscales correspondientes a certificar, es decir, los periodos en que los municipios deben cumplir los requisitos para su certificación, ni tiene en cuenta los derechos de los beneficiarios de esos recursos para su administración y ejecución en otras vigencias diferentes.

Así mismo, el Artículo 20 de dicho decreto enuncia que: "(...) Artículo 20. Certificación de los municipios o distritos descertificados. A partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el cual se certifica a un municipio o distrito descertificado, éste reasumirá la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y la competencia para asegurar la prestación de estos servicios(...)" (Subrayo). Como puede evidenciarse no existen criterios en tal norma para volver a certificar o recertificar a un municipio que fue descertificado, no evidenciamos términos o plazos perentorios ni procedimiento para el efecto, por consecuencia, la medida de no permitir la administración de recursos a futuro, no se compadecería con los principios de inmediatez, proporcionalidad, oportunidad y justicia, entre otros, por lo que ruego del señor Superintendente no mantener la descertificación.

5. Finalmente, como la situación que se esgrime, consistente en que la persona que firmó la Resolución 001 de 2010 no era la competente para el efecto (sin perjuicio de lo ya informado al respecto), correspondería a un asunto que no sería objeto de discusión por parte de la SSPD. Pues, por regla general, todo acto está cobijado por la presunción de legalidad y si bien ese Despacho tuvo en cuenta la presunta falta de competencia del suscriptor de dicho acto para negar la certificación, ello no conllevaría a que esa presunción legal haya quedado desvirtuada, es decir, a la fecha ese acto no ha sido anulado por el Juez natural y, por ello mismo, produjo efectos jurídicos, pues, con base en él y con fundamento en la prevalencia de la realidad sobre las formas, el Municipio implementó y ejecutó la"

Por lo anterior, el señor alcalde municipal de Covarachía, Boyacá, solicita se revoque la Resolución 20144010009025 del 31 de marzo de 2014 y en su lugar se expida una Resolución que certifique al municipio de Covarachía, en relación con la administración de los recursos SGP – APSB correspondiente a la vigencia 2012.

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documentos radicados No. SSPD 20145290204212, del 25 de abril de 2014 y 20145290209932 del 28 de abril de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, no se allegaron pruebas.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1 Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

Argumenta el recurrente que el señor Rafael García, quien firma la Resolución No. 001 del 25 de febrero de 2010, por la cual se adopta la nueva estructura tarifaria para el cobro de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Covarachía, que cargó en el SUI en el formato habilitado para el efecto, lo hizo en calidad de presidente de la Junta Municipal de Servicios Públicos de Covarachía, esto por cuanto los miembros del municipio dieron cuenta de ese hecho, que el señor alcalde en un principio desconoció. Adicionalmente manifiesta que reflejo de haber adoptado las tarifas es la acreditación del requisito referente al cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

De igual manera el señor alcalde de Covarachía pone de presente que la Resolución No. 001 de 2010, fue tenida en cuenta dentro del proceso de certificación que se agotó respecto de la vigencia 2011, y que para el caso concreto derivó en la certificación del municipio; de otra parte, manifiesta que si bien la descertificación se dió respecto de la vigencia 2012, la misma opera desde su decreto, pero sin expresar hasta cuando, *"lo que significa que se consagró una intemporalidad"* y aduce que la misma es incompatible con la Constitución.

Finalmente, esgrime el impugnante que de no ser la persona que firmó la Resolución 001 de 2010 la competente para el efecto, constituye un asunto cuya discusión no le correspondría a la SSPD.

Ahora bien, una vez revisada la información reportada por el municipio en el SUI, se tiene que el ente territorial, en el formato habilitado para cargar el acto de aprobación de tarifas, reportó en dos oportunidades (30 de agosto de 2013 y 10 de abril de 2012) la Resolución No. 001 del 25 de febrero de 2010, por medio de la cual se adopta la nueva estructura tarifaria para el cobro de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Covarachía, la cual esta suscrita por el señor Rafael García, como se puede verificar en las siguientes imágenes:

Sistema Unificado de Información de Servicios Públicos SUI
República de Colombia

aseo
consulta de información

aseo/Comercio/Información PDF-TIFF

(Para formato HTML) N° Registros en pantalla: todos

Generar reporte en formato: XLS HTML PDF CSV

Departamento: BOYACA

Municipio: COVARACHÍA

Empresa: UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA BOYACA

Formato: Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD.15083 de 2009)

Información PDF-TIFF

Departamento

Municipio

Empresa

Formato

171

ID EMPRESA	EMPRESA	FORMATO	ARCHIVO	ESTADO DEL FAVOR	PERIODICIDAD	AÑO DE REPORTE	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACIÓN
1300	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA BOYACA	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD.15083 de 2009)	APROBACIÓN TARIFARIA.pdf	ND	Anual	2011	1	2012-08-04
1300	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA BOYACA	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD.15083 de 2009)	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS COVARACHIA.pdf	ND	Anual	2012	1	2013-08-30

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

**JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COVARACHIA
RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN
TARIFAS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE COVARACHIA
JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / UNIDAD MUNICIPAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
RESOLUCIÓN N° 001 de 2010
(FEBRERO)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA
PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE COVARACHIA "UMSERCOVA" A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DE 2010**

**JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / UNIDAD MUNICIPAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
"UMSERCOVA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y EN
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 142 DE 1994**

CONSIDERANDO:

- Que en el municipio de COVARACHIA, a través de la Unidad Municipal de Servicios Públicos de Covarachia "UMSERCOVA", se realiza la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y por lo tanto, la entidad tarifaria local es el Alcalde Municipal/ Junta Municipal de Servicios Públicos.
- Que la Resolución CRA 287 de 2004, emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, estableció la metodología para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado.

ARTICULO DECIMO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dado en COVARACHIA a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2010

Rafael García P
EL PRESIDENTE

Luis Alberto Siza
EL SECRETARIO

Sea lo primero advertir, que esta entidad mediante Auto No. 20134010020996 del 23 de octubre de 2013, ordenó oficiar al señor alcalde de Covarachia, a fin de que alleguara al Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, los soportes que acreditaran si el señor Rafael García, tuvo la calidad de alcalde o apoderado para suscribir la Resolución No. 001 del 25 de febrero de 2010, mediante la cual se adopta la nueva estructura tarifaria para el cobro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Unidad Municipal de Servicios Públicos de Covarachia, a lo cual el alcalde municipal manifestó mediante oficio radicado SSPD No. 20135290608222, del 22 de noviembre de 2013, que la Resolución "curiosamente aparece firmada por el señor RAFAEL GARCÍA P. actuando como un suscriptor más de los servicios públicos (...)", motivo que fundamento la desertificación del municipio.

Ahora bien, en el recurso de estudio el representante legal del municipio, nuevamente se pronuncia respecto de la persona que firma la Resolución 001 de 2010, y aduce que el señor Rafael García, según información de la comunidad, fungió como presidente de la Junta Municipal de Servicios Públicos y que en dicha calidad suscribió el Acto Administrativo.

Al respecto es necesario precisar que el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, dispone que los concejos municipales determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y de ser así, ésta será compuesta como lo dispone el artículo 27 de la misma Ley 142; en este entendido el artículo 27 en su numeral 27.6., es claro al consagrar que:

"Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los Servicios Públicos Domiciliarios del orden municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán designados libremente por el alcalde y la otra tercera

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos domiciliarios."

De lo anterior se deriva, que quien preside la Junta será el alcalde, que como ordenador del gasto, además de presidirla elegirá a las dos terceras partes de la misma.

Así las cosas, conforme a la Resolución CRA 151 de 2001, el acto de aprobación de tarifas podrá ser expedido por el alcalde municipal o por la Junta a que hace referencia el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, la cual es presidida por el alcalde, y compuesta como dispone la citada norma, en este sentido, se tiene que el señor Rafael García, según la información allegada no ostentó la calidad de alcalde, motivo por el cual se reafirma lo manifestado en la Resolución recurrida respecto del punto concreto.

En lo relacionado con el argumento de que el reflejo de haber adoptado las tarifas, es la acreditación del requisito referente al cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI, se aclara que el reporte y análisis de cada uno de los requisitos que exige el Decreto 1639 de 2013, **es independiente**, el legislador consideró necesaria la diferencia entre uno y otro, de ahí que su reporte tenga que efectuarse en formatos distintos, de no ser esa la intención, la norma establecería que el municipio podía acreditar el cumplimiento del requisito incumplido así: **"aportando el acto de aprobación de tarifas" ó "reportando el 30% de la obligación de reportar las tarifas"**, situación que no corresponde a lo dispuesto por el Decreto 1639.

Ahora bien, es preciso señalar que esta entidad evalúa la información que el municipio reporta en el SUI para el efecto, requisito por requisito, tal como el Decreto 1639 de 2013 y las normas complementarias lo establecen, no es de recibo entonces, que esta superintendencia dé por cumplido un criterio por cuanto otro que fue acreditado parece ser la consecuencia de aquel.

Respecto de la manifestación del señor alcalde acerca de que la Resolución 001 de 2010, fue tenida como válida por parte de la SSPD en el proceso de certificación que se agotó en torno a la vigencia 2011 y que para el caso concreto culminó con la certificación del municipio de Covarachía, no es de recibo, toda vez que como se observa en la imagen adjunta, en ninguna de las observaciones respecto de los criterios, se menciona el Acto Administrativo que nos atañía, así las cosas, el argumento no puede ser tenido en cuenta por esta entidad, de un lado, porque como se desprende de la imagen, lo afirmado por el recurrente no corresponde a la realidad, y de otro, por cuanto los procesos referentes a la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de agua potable y saneamiento básico, que se agotaron en el año 2012 respecto de la vigencia 2011 y en los años 2013 y 2014 respecto de la vigencia 2012, son completamente independientes, y por tanto la Resolución que hoy se recurre no se atiene a los resultados del proceso anterior.

[illegible]

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Acerca de la intemporalidad de la descertificación que predica el recurrente, es preciso detenernos en la siguiente norma:

Artículo 20 del Decreto 1040 de 2012:

"Certificación de los municipios o distritos descertificados. A partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el cual se certifica a un municipio o distrito descertificado, éste reasumirá la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico y la competencia para asegurar la prestación de estos servicios. En dicho evento, el distrito o municipio dará continuidad a los compromisos asumidos con el prestador de los servicios que haya sido vinculado por el departamento en virtud de lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas administrativas:

20.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo a que se refiere este artículo, el municipio o distrito certificado deberá remitir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una comunicación escrita firmada por el alcalde con la identificación exacta del número de la cuenta bancaria y nombre de la entidad financiera en la cual se administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico del municipio o distrito. Recibida la comunicación con la información anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ordenará el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico a la cuenta designada por el municipio o distrito certificado.

20.2. El saldo de los recursos de Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico asignado al municipio o distrito que no fueron ejecutados por el departamento durante el periodo en que asumió la administración de estos, deberá ser consignado en la cuenta designada por el municipio o distrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de certificación.

20.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuará efectuando los giros directos a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios autónomos o a los esquemas fiduciarios constituidos para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico que hayan sido autorizados por el departamento en su calidad de administrador."

En este orden de ideas, es claro que no existe la intemporalidad predicada, ya que de la lectura de la norma citada, se extrae que la descertificación cesa en la medida que se expida un nuevo Acto Administrativo certificando al municipio. Así las cosas y dicho en otras palabras, los efectos de la descertificación concluyen una vez el municipio en el proceso de certificación siguiente o siguientes, al que decidió descertificar, cumpla los criterios que la norma establezca para la vigencia respectiva y como resultado de ello, se produzca una Resolución que decida certificarlo. Aunado a lo anterior, se aclara que el proceso de certificación en mención, se realiza anualmente.

Finalmente, frente a la afirmación del impugnante respecto de la cual no es asunto de la SSPD determinar si el señor Rafael García, fue o no competente para suscribir la Resolución 001 de 2010, esta entidad manifiesta que si bien no es de su resorte discutir la legalidad de un Acto Administrativo, si le asiste conforme al artículo 8° del Decreto 1639 de 2013, la facultad de definir los protocolos para la revisión de la información y de los criterios que le corresponde verificar, por tanto dentro del proceso de certificación además de examinar que el municipio de cumplimiento a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional, se analiza que lo reportado se ajuste a las normas vigentes, en consecuencia y en virtud de la atribución mencionada, el Acto Administrativo en cuestión no se tiene como válido, por advertir la falencia señalada.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Luis Alfonso Camacho Téllez como alcalde municipal de Covarachía, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010009025 del 31 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

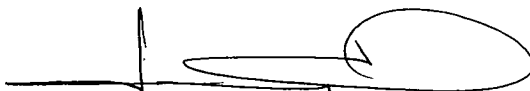
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de Covarachia, departamento de Boyacá, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo- Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovannil Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Angela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094011527280236A